

Corrupción en El Salvador: políticos, policías y transportistas

Tabla de contenido

Los infiltrados: Crónica de la corrupción en la policía de El Salvador.....	3
El pecado original	5
Chepe Luna, la policía y el arte del escape	10
De queso a cocaína	11
El arte del escape.....	12
Operación Camaleón: anatomía de un fracaso	16
Cazando a Daniel Quezada	17
Policías, protección y filtraciones	18
El sinsabor de pocos resultados.....	19
Cómo un narco llamado Colorado entra cocaína en Estados Unidos	22
Ruta San Salvador–Nueva York	22
Capturas y liberaciones	24
El arreglista y la oportunidad perdida de la policía de El Salvador	27
El arreglista	28
Oportunidad perdida	30

Los infiltrados: Crónica de la corrupción en la policía de El Salvador

Por Héctor Silva



Ricardo Mauricio Menesses Orellana acompañaba la cabalgata. Era un jaripeo, una fiesta ecuestre en el municipio de Pasaquina, la Unión, territorio de la banda Los Perrones, el grupo de narcotransportistas más poderoso de El Salvador, a la que también asistían Héctor Odir Ramírez, alcalde del pueblo, y José Natividad “Chepe” Luna Pereira,

un traficante de drogas y personas al que Estados Unidos seguía la pista desde mediados de los años noventa.

A Menesses le gustan los caballos, y el jaripeo de Pasaquina era una gran oportunidad para vivir la fiesta equina. El problema es que Menesses era, cuando agentes encubiertos antinarcóticos lo vieron en aquella feria en la que también estaba Chepe Luna, el director de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador. El Grupo Especial Antinarcóticos (GEAN) de la Policía salvadoreña -una unidad élite entrenada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y financiada en parte por Washington- seguía la pista a Chepe Luna al menos desde 2004. En 2005, un equipo de vigilancia del GEAN había ubicado al narcotraficante en el jaripeo de Pasaquina, en el extremo oriental de El Salvador: la cabalgata era liderada por el director Menesses, seguido del alcalde de Pasaquina, Ramírez, y del propio Chepe Luna. Un policía antinarcóticos encubierto, que participó en el operativo, aseguró que parte del equipo de vigilancia fue reconocido por el director Menesses. Momentos después, el jefe de la División Antinarcotráfico (DAN) de la PNC, Godofredo Miranda, ordenó a los agentes encubiertos retirarse. El director Menesses se graduó de la Escuela Militar en 1987. Ingresó formalmente en la PNC el 8 de marzo de 1993[1], casi un año y dos meses antes de darse de baja del Ejército. El 12 de diciembre de 2002, su antecesor, el director Mauricio Sandoval, lo juramentó como subdirector general. Tras la renuncia de Sandoval a finales de abril de 2003, Menesses pasó a ser el máximo responsable de la PNC, primero de manera interina durante diez días, hasta que el 9 de mayo el presidente Francisco Guillermo Flores Pérez lo juramentó como director general.



Según confirmaron tres de sus superiores, el director Menesses nunca destacó por sus calificaciones o dotes de liderazgo. Si llegó a puestos clave, dice un exdirector general, fue porque era un hombre “controlable”, un “director ausente”.

Antes, el director Menesses había pasado por el Centro de Inteligencia Policial (CIP) -del que fue el primer jefe- por la División de Finanzas y por la DAN.

En junio de 2004 Elías Antonio Saca llegó a la presidencia, pero el director Menesses mantuvo su puesto un año y medio más. Aunque de cara a la opinión pública su mandato se ligó a los planes Manos Dura y Súper Mano Dura -estrategias antipandillas que tenían como objetivo poner tras las rejas a centenares de jóvenes vinculados

a las maras- desde un inicio despertó sospechas entre miembros del gabinete del presidente Saca, en el fiscal general, e incluso en diplomáticos acreditados en El Salvador, pero su estrecha relación con el crimen organizado no se conocería sino hasta cuatro años después.

En 2005, tras varios operativos fallidos por capturar a Chepe Luna, y el episodio del jaripeo en Pasaquina, las actividades del director Menesses comenzaron a ser objeto de quejas y señalamientos privados. Un cable[2] fechado el 15 de octubre de 2005 de la Embajada de Estados Unidos para el Departamento de Estado menciona una conversación entre el jefe de misión adjunto, el consejero político y el fiscal general, Belisario Artiga, en la que este último insinuó que el director Menesses era corrupto y que se había enriquecido a través de su puesto.

Las presiones se intensificaron, y el presidente Saca nombró director general a Rodrigo Ávila, pero, lejos de ordenar la apertura de una investigación contra el director Menesses, lo envió a un exilio dorado en la embajada salvadoreña en Washington[3].

Casi cuatro años después, el nombre del primer policía de carrera que llegó a la dirección de la PNC volvió a la agenda pública. El 20 de julio de 2009, la Inspectoría General abrió una investigación en su contra por su vinculación con Chepe Luna, basada en los informes de 2005 que lo ubicaban en aquel jaripeo.

Tres meses después, la Inspectoría le abrió un nuevo expediente, esta vez por supuestos vínculos con Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, uno de los líderes de la pandilla Barrio 18, quien luego sería condenado por extorsión y homicidio[4]. En febrero de 2010 a estos cargos se le agregó el de abandono laboral, por no presentarse a su puesto después de haber regresado de

Washington en diciembre del año anterior.

Al final, el tribunal disciplinario de la PNC destituyó a Menesses en marzo de 2010 por abandono de labores y no por ninguno de los otros cargos.

Con Ricardo Menesses, la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en la PNC de El Salvador llegó hasta los despachos del más alto nivel en San Salvador.

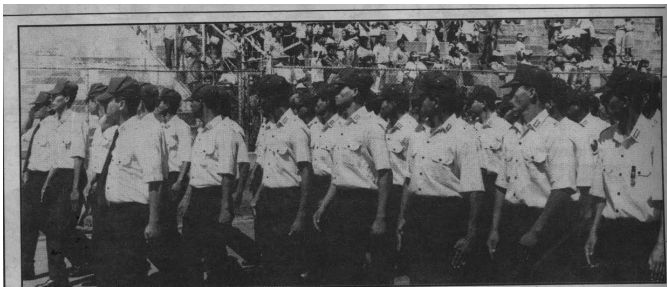
No siempre fue así. En 1993, tras la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno del partido político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) al que apoyaba Washington, la PNC era una ventana a la esperanza.

El pecado original

La PNC fue creada por los Acuerdos de Paz para sustituir a la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional, los tres cuerpos de seguridad dependientes de las Fuerzas Armadas, a los que la Comisión de la Verdad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló como autores de graves violaciones a los Derechos Humanos, asesinatos extrajudiciales y masacres[5]. Se suponía, en el papel, que la PNC sería la punta de lanza de una nueva cultura de paz; que debido a su cercanía con la gente el rol de la nueva Policía sería esencial en el proceso de democratización del país: en la PNC descansaba el estado para aplicar las nuevas leyes, ganar la confianza de la población civil y, al final, para legitimar su derecho a usar la fuerza para mantener el orden y hacer valer la legalidad en la posguerra, que se preveía turbulenta. Si la PNC fallaba, dijo en su momento la ONU, todo el proceso podía verse amenazado en el futuro.

La PNC falló y, de hecho, el proceso salvadoreño, el de consolidación de su paz y su democracia, es incompleto y débil por esa falla.

La PNC fue capaz de trascender el status quo previo: es, sí, una policía más profesional, menos rudimentaria, más capaz, democrática, profesional y orientada a los ciudadanos que sus tres antecesoras militares, la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional. Esto tampoco es mucho decir. El cambio, además, no debería atribuirse a las élites políticas salvadoreñas, de derecha o izquierda, ni al liderazgo de la PNC. Fueron la comunidad internacional,



representada por la Naciones Unidas, por la incipiente sociedad civil salvadoreña, e incluso por las víctimas mismas de los abusos policiales y por unos pocos policías visionarios, los que impidieron la regresión absoluta

de la PNC. Las buenas noticias, sin embargo, acaban ahí.

La investigación plasmada en esta serie -y en el libro “Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC”, que se publicará en San Salvador en marzo- permite sostener que la PNC ha fracasado. Fracasó en la tarea de construir una nueva cultura de aplicación de la ley y en la de cambiar la conducta de sus oficiales. Fracasó en la tarea de crear métodos efectivos de depuración interna. Y, con consecuencias devastadoras para su misión de perseguir y prevenir la actividad criminal, la PNC falló en su tarea de entrenar agentes capaces de investigar y castigar a los transgresores de la ley sin importar sus conexiones políticas, ideologías o su estatus económico o social. Como sus antecesores, la PNC se especializó en obstruir la justicia y garantizar la impunidad para aquellos con suficiente influencia o dinero.

Como la ONU predijo al enumerar una y otra vez los riesgos de que la PNC naciera contaminada o sin herramientas eficaces para limpiarse a sí misma, y como advirtieron algunos funcionarios extranjeros al señalar la falta de voluntad política de sucesivos gobiernos para fortalecer una fuerza pública independiente y profesional, la debilidad institucional pasó factura: fue por la Policía por donde el crimen organizado transnacional, sobre todo organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero, penetraron el sistema de partidos políticos y el tejido social. Ricardo Menesses tipificaba los problemas en muchos aspectos, comenzando por su origen militar. Fue el primer policía de carrera que llegó a la cima de la institución, pero también fue el primer director de la PNC que ingresó al cuerpo sin siquiera haberse dado de baja del Ejército. Los Acuerdos de Paz preveían que los oficiales del ejército que formarían parte de la PNC debían darse de baja de la situación militar activa como parte del proceso para crear una nueva Policía, alejada de la historia de corrupción, violaciones a los Derechos Humanos y asesinatos extrajudiciales que plagaban a los viejos cuerpos de seguridad. El 12 de mayo de 1994, el presidente Alfredo Cristiani firmó el Acuerdo Ejecutivo No. 221[6], que daba de baja en forma extemporánea a 25 oficiales del ejército, miembros de los antiguos cuerpos de seguridad, entre ellos Ricardo Menesses. La inclusión de ese grupo en puestos de mando en la PNC marcó la primera gran violación del Gobierno al espíritu de los Acuerdos de Paz en el tema de la seguridad pública al aceptar militares de alta en la nueva Policía. De ese grupo de policías surgió la élite más poderosa de la PNC, que ha terminado siendo también la más cuestionada.

En el grupo están los oficiales que más poder han tenido desde que se creó la institución y también los oficiales sobre quienes pesan los más graves señalamientos periodísticos, administrativos y judiciales. A varios de esos oficiales se los ha investigado o acusado de favorecer a contrabandistas, narcotraficantes, pandilleros y lavadores de dinero, de acoso sexual, de obstruir la justicia, de torturas, de amenazas, de intento de homicidio. Pero solo uno ha enfrentado a un juez, en un caso relacionado con un escuadrón de la muerte dedicado a ejecutar a

miembros de pandillas, y salió libre. Del resto, la mayoría sigue en la PNC, y buena parte continúa en puestos de poder.

Entre los 25 nombres que se incluyeron en el Acuerdo No. 221, han salido un director general de la PNC, tres subdirectores, cuatro jefes de la DAN, un jefe de la CIP, un jefe del Centro Antipandillas Transnacional, tres jefes de la División de Investigación Criminal, dos jefes de Áreas Especializadas y varios asesores de la dirección general.

“En una reunión con los más altos jefes de la Policía y de Seguridad Pública se lo dije: ‘Ustedes han tenido el poder 20 años, y lo bueno o malo que pase en la PNC es responsabilidad de ustedes, de nadie más’”, dice un miembro de la Fiscalía[7] sobre una reunión realizada en julio de 2013 en la que se abordó la captura de un narcotraficante y la posible complicidad que con él tienen varios altos mandos policiales. En ese encuentro estuvieron el fiscal general, el director de la PNC, algunos subdirectores y representantes del Ministerio Seguridad Pública.

La Inspectoría General investigó a al menos nueve de los oficiales que aparecen en el Acuerdo 221 por faltas administrativas graves o menos graves. Seis fueron expedientados por la inspectora Zaira Navas, tres por el inspector Raúl Melara Granillo, y dos por la inspectora Nora Centeno de Bell[8]. Entre estos oficiales está Menesses.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) mencionó a seis de ellos en informes por violaciones al derecho a la vida, al derecho a las garantías judiciales, al derecho al debido proceso legal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a la verdad en diversos casos. En tres ocasiones -dos[9] de ellos conocidos también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos- la PDDH recomendó a la Fiscalía y a la misma PNC establecer responsabilidades administrativas y penales, lo cual nunca ocurrió.

Uno del listado fue demandado tres veces por acoso sexual[10] y una más por discriminación laboral en diferentes tribunales y ante la PDDH. El sistema judicial lo sobreesó en todos los casos.

Otro exmilitar fue señalado por uno de los directores generales de la institución por fraude procesal. En virtud de un decreto legislativo que le dio poderes especiales para saltarse los procesos disciplinarios y las sanciones administrativas, el director expulsó a ese mismo oficial de la PNC, pero la Corte Suprema de Justicia revirtió casi todos los procesos iniciados, y el oficial, además de otros que habían sido sancionados o separados de sus cargos, fueron perdonados y retornaron a sus puestos.

Uno de los pocos oficiales que terminó fuera de la PNC, en aquel proceso iniciado por el director Sandoval en 2000, fue Douglas Inestroza Ascencio, también miembro del grupo.

Uno de los tenientes del Acuerdo 221 fue el único que tuvo que sentarse frente a un juez en 1995 acusado de formar parte de la Sombra Negra[11], un escuadrón de la

muerte en la que participaron policías que se dedicaba a ejecutar pandilleros y miembros de bandas del crimen organizado. El oficial fue exonerado poco menos de un año después de su arresto y desde entonces, ha ocupado puestos importantes en la PNC.

Desde el principio, la PNC nació con su propio pecado original: la inclusión de exmilitares que pactaron con el crimen organizado y aseguraron una estructura de poder cerrada que impidió, por más de dos décadas, que alguna autoridad los investigara.

Menesses se fue por su propio pie. Y todos los oficiales de aquella tanda que se dio de baja en 1994, y fueron luego acusados de delito, siguen en sus oficinas, lejos, la mayoría, de procesos penales o investigaciones internas. La sensación de que el proyecto inicial de la PNC quedó cortado es, ahora, más profunda.

Nota al pie

[1] Beltrán, J. “Ricardo Menesses queda a cargo interinamente”. El Diario de Hoy, San Salvador, 29 de abril de 2003.

[2] Butler, M. “El Salvador homicides equal 2004 figures/Finger pointing among justice sector.” Wikileaks. Cable: 05SANSALVADOR2811. 14 de octubre de 2005

[3] Ver de Silva Ávalos, Héctor “Washington, refugio para amigos de Chepe Luna”. InSightCrime.org, 28 de mayo de 2013. <http://es.insightcrime.org/analisis/washington-refugio-para-amigos-de-chepe-luna>

[4] Equipo Nación. “PNC investiga ex director por vínculo con pandillero. La Prensa Gráfica, San Salvador, 20 de octubre de 2009.

[5] Ver Resumen “De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador: Reporte de la Comisión de la Verdad para El Salvador.” Uca.edu.sv

[6] Como aparece publicado en el Diario Oficial ACUERDO No. 221.- San Salvador, 12 de mayo de 1994.

“El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional Acuerda: TRANSFERIR de la Situación Activa Categoría de las Armas, a la Situación de Reserva en la misma Categoría a los señores Mayor ÓSCAR ARMANDO PEÑA DURÁN; Capitanes ABRAHAM ALBERTO MARÍN LÓPEZ; ÓSCAR OLIVERIO GÓMEZ DUARTE; LUIS ERNESTO NÚÑEZ CÁRCAMO; Tenientes GODOFREDO ALBERTO MIRANDA MARTÍNEZ; VLADIMIR ALBERTO CÁCERES RIVAS; WILFREDO DE JESÚS AVELENDA ECHEVERRÍA; ÓSCAR ORLANDO CALDERÓN BAIDES; VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ PERAZA; DOUGLAS OMAR GARCÍA FUNES; JAIME FRANCISCO VIGIL RECINOS; RICARDO MAURICIO MENESSES ORELLANA; WILLIAM LEONEL ORANTES SALAZAR; PEDRO BALTAZAR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ; PABLO DE JESÚS ESCOBAR BAÑOS; JORGE ARMANDO FLORES VELASCO; MAURICIO ANTONIO ARRIAZA CHICAS; CÉSAR BALDEMAR FLORES MURILLO; DANIEL DE JESÚS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ; DOUGLAS RENÉ INESTROZA ASCENCIO; ALEX ENRIQUE LEMUS RECINOS; ÁNGEL MIGUEL BARQUERO SILVA; Subtenientes MAXIMILIANO TORRES JIMÉNEZ; ROMEO ANTONIO MARTÍNEZ MOLINA y MIGUEL ÁNGEL GUERRERO VALLECILLOS.

El presente movimiento surtirá efecto a partir de esta fecha. COMUNÍQUESE (Rubricado por el señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada). El Viceministro de la Defensa Nacional, TEJADA MURCIA

[7] Entrevista con el autor. San Salvador. Agosto 2013.

[8] Los oficiales Luis Ernesto Núñez Cárcamo y Wilfredo de Jesús Avelenda Echeverría fueron

expedientados en más de una ocasión.

[9] Ver Caso García Prieto y otro versus El Salvador. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Ver Informe Especial de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, dictado el 9 de mayo de 2002, Katya Natalia Miranda Jiménez.

[10] Ver Informe Especial sobre Acoso Sexual y Discriminación de las Mujeres en la Policía Nacional Civil. PDDH. Mención a Wilfredo Avelenda Echeverría, 24 de julio de 2003.

[11] Para un recuento completo del caso Sombra Negra y de las acusaciones contra Flores Murillo y otros miembros de la PNC ver Ladutke, Lawrence Michael. "Freedom of expression in El Salvador". 2004. Págs. 205 ss.

Chepe Luna, la policía y el arte del escape

Por Héctor Silva



Mientras el país debatía la validez de poner tras las rejas a centenares de jóvenes vinculados a las maras, en la década pasada, en la porosa frontera terrestre con Honduras y en las costas aledañas al golfo de Fonseca, el poderoso consorcio de contrabandistas de lácteos e indocumentados, conocido como Los Perrones -encabezado por José Natividad Luna Pereira, alias “Chepe Luna”, y Reynerio

Flores Lazo, y respaldado en añejas conexiones con policías y jueces locales- se disponía a utilizar sus viejas rutas de trasiego para mover un producto mucho más rentable: cocaína.

Para Raúl, una fuente que pidió no ser identificada, y testigo de aquella transformación en su calidad de contrabandista, el salto respondía al sentido común: “Si alguien sabe el oficio de contrabando, cualquier cosa puede pasar”. Estados Unidos, que a través de sus agregados policiales, antinarcóticos y judiciales conocía bien las rutas del contrabando, y sobre todo de la trata de personas - muchas veces solían coincidir- recibió en 2004 al nuevo Gobierno, presidido por Elías Antonio Saca, con una propuesta: golpear a Chepe Luna.



Luna era un exitoso empresario ganadero que se convirtió en contrabandista, traficante de personas y de drogas, según lo describen los perfiles elaborados en despachos policiales durante las administraciones de los presidentes Francisco Guillermo Flores Pérez (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009). Obtuvo su documento único de identidad (DUI) en Santa Rosa de Lima, La Unión, al oriente de El Salvador, el 16 de agosto de 2003; registró sus datos a las 9:59 de la mañana, y 13 minutos después tenía su identificación, la número 2936356. José Natividad Luna Pereira, nacido el 25 de febrero de 1970 en el municipio de Pasaquina (La Unión), de 1.65 metros de altura y compañero de vida de Sonia Marlenis Cabrera.

Aquel no fue un trámite normal. Para recibir su DUI, Luna presentó una partida de nacimiento que había obtenido cuatro meses antes, el 6 de mayo, en la Alcaldía de Pasaquina. Los empleados municipales extendieron la partida aunque él ya tenía identidad hondureña y los datos de otros documentos registrados a su nombre en esa alcaldía no coincidían con los que ahora presentaba. El obstáculo no fue difícil

de superar: seis días antes de aquella visita de Chepe Luna al recinto municipal, había asumido como alcalde Héctor Odir Ramírez -por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena)- un viejo vecino del cantón Santa Clarita, el pequeño pueblo en que ambos consumieron parte de sus infancias[1]. Cuando Chepe Luna sacó aquellos documentos, pesaban sobre él varias acusaciones, arrestos y procesos judiciales. Para entonces, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) lo habían identificado como uno de los traficantes de personas más importantes de Centroamérica, y una corte de Nueva York incluso había girado una orden de captura en su contra por sospechas de tráfico de drogas y lavado de dinero.

De queso a cocaína

Registros de la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) certifican que el 21 de marzo de 2002 Luna participó en una golpiza a dos agentes que perseguían un vehículo cargado con queso de contrabando. Fue arrestado por lesiones. Durante el proceso judicial, cinco días después, la Fiscalía le agregó cargos de amenazas luego de que gritara y agrediera a sus acusadores. Tres años antes, había sido arrestado por contrabando. En ambas ocasiones los procesos se cayeron por falta de pruebas y recobró la libertad sin mayores problemas.

En poco tiempo, se consolidó como el contrabandista más poderoso de Oriente gracias al control territorial que ejercía sobre los humedales aledaños al golfo de Fonseca, a su acceso a mercancía en Nicaragua y Honduras y, lo más importante, a una extensa red de colaboradores que afianzó poco a poco dentro del Estado, sobre todo en la PNC, pero también en la Fiscalía y en el sistema judicial. Un informe que el Ministerio de Hacienda elaboró en 2004 lo explicaba así:

El contrabando de todo tipo de mercaderías se acrecentó, pues los jefes policiales manifestaban que recibían dádivas de las estructuras grandes (...) a finales de 2003 y los primeros nueve meses de 2004 los policías favorecían a los contrabandistas de tal forma que (a) los dueños de mercadería que pagaban dádivas no los tocaban.

La estrategia de Chepe Luna era, entonces, la misma que la de otros contrabandistas del continente que, a la postre, terminaron convertidos en narcotraficantes: control territorial, acceso y administración de una red logística de transporte capaz de mover mercadería en forma segura y rápida, y dinero suficiente para comprar a las autoridades e, incluso, hacerlas partícipes del negocio.

Una nota de prensa publicada el 20 de septiembre de 2004 da cuenta de su modus operandi[2]: agentes de la División de Finanzas despejaban la ruta a contrabandistas de queso en el paso ciego El Cusuco. Otros agentes conversaban con los contrabandistas y un capitán del Ejército supervisaba a unos soldados que ayudaban a descargar marquetas de queso. Todo ocurría a pocos metros de una casa de Chepe Luna, en Barrancones, en el golfo de Fonseca, la entrada de mar

compartida por El Salvador, Honduras y Nicaragua, por la que durante las guerras centroamericanas de los ochenta pasó todo tipo de armas de contrabando. Otro informe policial, elaborado en 2004 por una mesa interinstitucional liderada por el Ministerio de Hacienda para combatir el contrabando, recoge el reporte de un grupo de inteligencia policial que habla sobre la base social que el contrabandista ya había construido: “Luna coordina lanchas rápidas y tiene desembarcaderos en el golfo. Hay uno en Isla Perico, a la entrada del canal de Barrancones, en el río Goascorán. Ahí, en un pequeño islote hay una hacienda que es de Chepe Luna, en la que trabajan 25 familias a las que él mantiene”. Ese reporte dice que Chepe Luna manejaba comunidades similares en la isla Muruhaca, El Cedro, San Juan y en los esteros La Manzanilla y El Robalón. El reporte periodístico también cita a una fuente no identificada de la PNC que agrega el ingrediente del tráfico aéreo: “También hay una pista de aterrizaje de la Fuerza Aérea, cerca de la playa El Tamarindo, en la que pobladores han visto vuelos rasos en la noche”. Cerca de esa pista, decían los investigadores, Chepe Luna también tenía gente. A mediados de 2004, según el informe del Ministerio de Hacienda, su influencia iba mucho más allá de los afianzados con sobornos a agentes y jefes en el departamento de La Unión:

Óscar Aguilar, alias “Cachorro”, permitió el crecimiento del contrabando de esos contrabandistas de Oriente que luego se conocieron como Los Perrones. Él tenía trato directo con las estructuras grandes, y los de abajo, agentes y jefes locales, iban tras los pequeños y luego de un pago inmediato los detenían, los dejaban libres rápido y les retenían la mercadería, que ahí ya era donde se beneficiaban en el sistema judicial. Cachorro era el jefe de la División de Finanzas.

En 2010, la Inspectoría General abrió a Cachorro un expediente por favorecer a Chepe Luna. En 2012 fue nombrado jefe del Centro de Inteligencia Policial, la unidad de la PNC que, se supone, deber recoger y analizar toda la información relacionada al crimen organizado.

El arte del escape

A finales de 2004, bajo los auspicios de la DEA, la administración del presidente Saca había formado una mesa de trabajo para perfilar a Chepe Luna y preparar operativos de captura. Participaban, además de una delegación estadounidense, la PNC, la Fiscalía y representantes del Ministerio de Seguridad Pública y de la unidad especial de investigaciones de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda.

“La idea que los norteamericanos nos vendían era que debíamos, como nuevo Gobierno, dar muestras de compromiso de lucha contra el crimen organizado, que

era algo que en aquellos primeros días parecía viable. Y nos recomendaron hacerlo a través de operaciones complicadas de seguimiento a delitos de evasión, contrabando, es decir, que la investigación fuera más por la parte financiera”, explicaba en 2009 uno de los ministros que participó en aquella mesa.

La mesa decidió emprender la búsqueda sin cuartel de Chepe Luna. Capturarlo implicaba demostrar que la PNC no estaba infiltrada, que la Secretaría Técnica de la Presidencia apostaba por el control real del contrabando como política fiscal, y que El Salvador se tomaba en serio el combate al narcotráfico. Pero todo falló porque la primera premisa era falsa: la PNC llevaba años infiltrada por los contrabandistas de Oriente.

Los investigadores empezaron por recabar informes de inteligencia y expedientes judiciales, incluido el que Chepe Luna tenía abierto en Nueva York, y pidieron al Registro Nacional de Personas Naturales y al Ministerio de Hacienda que elaboraran un perfil de identidad completo. En la Semana Santa de 2005, en un operativo internacional que incluyó la colaboración de la Policía de Nicaragua, se desarrolló uno de los intentos de captura.

Uno de los ministros que sabía del operativo se había ido a su rancho de playa el Miércoles Santo. En San Salvador, en la zona oriental, y en el noroeste nicaragüense, quedaban a punto los equipos desplegados para ejecutar el plan que él, la PNC, otros altos funcionarios y agentes estadounidenses habían dibujado una y otra vez en el papel durante larguísimas reuniones en la salita de conferencias del ministerio, en oficinas de la Embajada o incluso en Casa Presidencial. Si todo salía bien, al regreso de la vacación el ministro podría decir al presidente Saca que se había anotado un tanto excepcional: capturar al narcotraficante más buscado por la DEA en El Salvador. Así, alerta, el ministro llegó a su rancho, dispuesto a descansar un par de días. El celular permanecía encendido.

Desde las primeras horas de ese Miércoles Santo, mucho antes de que el ministro emprendiera ruta a la playa, un par de agentes y sus colegas nicaragüenses terminaban de afinar en Nicaragua la vigilancia del operativo que, según el plan, daría inicio a la cacería. La idea era hacerle caer en una trampa. Agentes encubiertos habían pactado con él la entrega de un cargamento de reses y cocaína para que lo transportara desde las costas de Chinandega, al Occidente de Nicaragua, hasta la carretera Panamericana, en el lado salvadoreño. La inteligencia analizada en San Salvador, recogida por agentes antinarcóticos con la ayuda de la DEA, había dado una idea bastante clara de las rutas utilizadas por Chepe Luna: Chinandega, golfo de Fonseca, Barrancones o Las Tunas, Pasaquina y Santa Rosa de Lima, ya sobre la Panamericana. El operativo incluía puntos de vigilancia en varios de esos lugares, incluso en San Miguel, el último punto de salida hacia la capital y Guatemala.

En San Miguel, Rosario y Marcial[3], dos agentes ejecutores del operativo de captura, a quienes no se identificó por sus nombres reales, también esperaban

señal cerca del centro comercial Metrocentro. En un Nissan blanco fingían ser una pareja de enamorados que aprovechaba el primer día de vacación para intercambiar besos en el estacionamiento medio vacío.

Entrada la noche, el celular del ministro aún esperaba noticias en la playa.

Un niño, según el relato posterior del ministro, dejó su bicicleta en el pavimento, cerca de la puerta del conductor del Nissan blanco; dio algunos golpes a la ventanilla. El agente Marcial bajó el vidrio. “Si quieren, pueden irse. El señor que están esperando no va a venir”, dijo el chiquillo.

Y en efecto: el señor al que los policías salvadoreños, estadounidenses y nicaragüenses esperaban no llegaría. Chepe Luna se había escapado.

La última vez que el celular del ministro sonó en el rancho de playa fue solo para anunciarle que todo el plan se había venido abajo. La única posibilidad, pensó el ministro, es que el oportuno soplo para el narco se había escapado de la mesa.

Desde el primer momento, el ministro sospechó de los policías que habían participado. No era esa la primera vez que la complicidad de los más altos jefes destruía investigaciones como esa. No sería la última.

En 2006, un año después del fracaso de aquella operación, el Gobierno emprendió una especie de depuración silenciosa que incluyó el traslado del director general a la Embajada de El Salvador en Washington, como enlace policial, en un puesto creado ad hoc por Casa Presidencial para el comisionado Ricardo Menesses.

Tres años después, la inspectora Zaira Navas lo investigaría y también a otros cuatro altos jefes policiales de aquel entonces por supuestos vínculos con Chepe Luna; entre ellos, Cachorro, a quien en 2008 el entonces director general de la PNC, Francisco Rovira[4], había rescatado del ostracismo para nombrarlo jefe del Centro de Inteligencia Policial (CIP), a pesar de los informes internos que lo vinculaban con Los Perrones.

A la postre, las investigaciones de la inspectora Zaira Navas quedaron en el olvido por la falta de apoyo político del presidente Mauricio Funes Cartagena, ante los ataques que venían desde la PNC y algunos partidos de derecha.

Después del fracaso de la operación contra Chepe Luna en 2004, uno de los tantos que la complicidad entre el capo y los policías ocasionó, el ministro decidió restringir el acceso a la mesa a finales de 2005. “Informé de todo a Casa Presidencial. Lo que acababa de pasar era muy grave. De todo supo Casa Presidencial. Le dijimos también de nuestras sospechas sobre la PNC”, relató el ministro en 2009. ¿Qué hizo el presidente Saca? Nada o muy poco, según el exfuncionario.

Notas al pie

[1] Entrevista con Odir Ramírez, alcalde de Pasaquina, La Unión, *La Prensa Gráfica*.

[2] Un equipo de periodistas de *El Diario de Hoy* atestiguó el contrabando de lácteos en un paso ciego en La Unión.

[3] Se utilizan seudónimos para nombrar a dos agentes de los que habló el exministro de Saca como ejecutores del operativo de captura y a quienes no identificó por sus nombres reales.

[4] Francisco Rovira fue nombrado el 5 de febrero de 2008 para sustituir al director Rodrigo Ávila, y renunció el 23 de agosto de ese mismo año en medio de acusaciones de corrupción contra él y sus asesores.

Operación Camaleón: anatomía de un fracaso

Por Héctor Silva



La experiencia con José Natividad “Chepe” Luna había demostrado que las filtraciones desde la PNC eran una constante y, en general, toda la historia del contrabando en Oriente tenía un extenso capítulo de connivencia policial y fiscal. El Grupo Especial Antinarcóticos (GEAN) decidió, pues, enviar a policías frescos a los puestos

de La Unión y San Miguel para, primero, recoger inteligencia sobre el movimiento de la droga, y después, empezar a montar casos judiciales contra los transportistas. Así nació la Operación Camaleón.

El Agente 1, uno de los investigadores del GEAN, quien también participó en la Operación Camaleón, explica el nombre: “La idea era cambiar lo que había ahí y adaptarse al terreno para poder funcionar, para poder de verdad conseguir información; se sabía que ahí la PNC trabajaba con los narcotraficantes”.

El alcance de la corrupción policial y, en general, de actores políticos de la zona fue evidente desde que el GEAN llegó a Santa Rosa de Lima y a El Tamarindo, una de las playas sospechosas de recibir desembarcos de cocaína.

Óscar René Molina Manzanares, uno de los miembros de Los Perrones, quien fue condenado en 2010 por lavado de dinero, fue uno de los nombres que con más fuerza sonó sobre el terreno.

“Él era quien patrocinaba fiestas en El Tamarindo. Por ejemplo, yo he visto cheques con los que él patrocinaba fiestas patronales [1] en el sector de Santa Rosa, en El Tamarindo. Había cartas que algunos alcaldes mandaban a este señor solicitándole su apoyo como patrocinador de las fiestas. El tipo era querido, tenía pisto y traía grupos de música, los grupos caros de México... las fiestas eran cortesía del señor Molina Manzanares”, relata el Agente 1.

Las fiestas, dice el policía, no solo servían para ganar adeptos y comprar políticos, sino que también eran el punto de encuentro perfecto entre narcotraficantes: “Empezamos a ver que en medio de los fiestones llegaban carros lujosos y que gente que estaba perfilada se reunía en un hotel de El Tamarindo para planificar cosas. Esto era algo que le interesaba a la DEA, que averiguáramos si llegaban mexicanos a esas fiestas”.

Cazando a Daniel Quezada



Mientras fiscales e investigadores estaban enfrascados en el rastreo de propiedades y relaciones comerciales, en las playas, un comando especial del GEAN -entre 15 y 20 agentes- se empezó a colar en puestos policiales cercanos a puntos de desembarco. Además de oficiales con mando en la División Antinarco tráfico (DAN), el jefe regional antinarco ticos de San Miguel, el inspector

Darwin Serrano Lemus, alias “Makey”, estaba al tanto de la operación.

Uno de los primeros movimientos del GEAN fue enviar agentes del “grupo de inteligencia de campo” de la DAN hasta El Tamarindo, para verificar si el Hotel Playas Negras, ubicado en primera línea de playa y propiedad de Daniel Quezada, otro de los líderes de Los Perrones, se usaba para desembarcar cocaína procedente de Nicaragua. Además de destacar tres agentes especializados en el puesto policial del lugar, el GEAN envió a otros agentes de campo encubiertos, que se hacían pasar por motoristas, vendedores o comerciantes. También hubo inspecciones de rutas marítimas y de playas, casas y bodegas en islas e islotes desolados del golfo de Fonseca [2].

El 7 de abril de 2008, el sargento Rudis Mauricio Santos Vásquez escribió un informe para su jefe, el subinspector Cabrera Soriano, en el que resumió las acciones ejecutadas después de casi un año de investigaciones: “El 4 de los corrientes salí a eso de las 14:00 horas al golfo de Fonseca con el propósito de interceptar lanchas y barcos y levantar información relacionada al contrabando de armas, drogas y otros ilícitos”.

Ese mismo día, agentes bajo el mando del sargento Santos Vásquez contactaron a uno de los informantes de la Operación Camaleón, quien les relató la historia de Pablo Quezada, pandillero de la MS13 y uno de los principales intermediarios de quienes recibían desembarcos de cocaína en El Tamarindo.

El de Pablo Quezada, la PNC lo sabría luego, era un perfil bastante común en la zona oriental: un pandillero buscado en Estados Unidos por delitos graves, homicidio en su caso, que regresó al país a refugiarse y aprovechó las habilidades desarrolladas en la costa Este para iniciar operaciones de tráfico o venta en pequeño en su lugar de origen.

El informante del GEAN, a quien los investigadores habían llamado “Beto”, perfiló así al pandillero Pablo Quezada:

Había crecido en Virginia, y hace unos dos años él y sus dos hermanos se vieron involucrados en un homicidio. Uno de sus hermanos está detenido en Estados Unidos, y él y el otro huyeron por vía terrestre a El Salvador, y se instalaron en El

Tamarindo. Seis meses después, este sujeto se enteró de que la Interpol lo andaba buscando y decidió salir hacia Nicaragua, donde permaneció cerca de seis meses. Ahí hizo contacto con gente que le dio droga, cocaína para traerla a El Salvador. Hizo tres viajes y desembarcaba la droga frente al Hotel Playas Negras.

Policías, protección y filtraciones

Beto confirmó en 2008 varios datos que la PNC venía escuchando desde 2006 de otros informantes sobre el narcotráfico en las playas de La Unión y la participación de policías en la protección. Beto, por ejemplo, reforzó o confirmó cosas que otra informante, una mujer, había empezado a decir a la PNC en 2006. Las más relevantes: el trasiego era importante, incluía a proveedores en Colombia, se hacía a través de lanchas y descargas desde avionetas en una pista en El Jagüey [3], al Oriente de El Salvador, y contaba con protección policial del puesto aledaño a la pista y el de Playas Negras [4].

Beto también confirmó a los investigadores antinarcóticos que los agentes asignados al puesto de El Tamarindo, cerca del hotel, trabajaban para Daniel Quezada, hermano del pandillero Pablo Quezada.

“Este hombre [Daniel Quezada] presume de que tiene de su parte a la Policía del lugar y es él quien manda ahí”. Tras constatar que era un pescador humilde en los noventa que empezó a adquirir propiedades de 2000 en adelante, Beto cuenta que ha visto llegar hasta Playas Negras “vehículos de la PNC, y los policías facilitan y dan cierta cobertura a los desembarcos”.

En su informe de abril de 2008, el sargento Santos Vásquez cita a otro informante que le da más detalles de la participación de agentes en El Tamarindo, pero esta vez no en el Hotel Playas Negras: “El 28 de marzo, [el testigo] vio una lancha que transportaba drogas y que había atracado frente al puesto policial de la playa y vio que los policías estaban bajando los bultos; se trataba de droga” [5].

El Agente 1 explica que toda la información que los equipos de campo consolidaron entre 2007 y 2008 sirvió de base a las investigaciones posteriores sobre Los Perrones y sobre los policías corruptos. Camaleón, dice el Agente 1, enfrentó serios obstáculos desde el principio, relacionados con filtraciones desde la misma PNC, que pusieron en riesgo la confidencialidad necesaria para que una operación de este tipo funcionara.

Hubo filtraciones de algunos agentes ajenos al plan que, en San Miguel [6] y en la playa, sospecharon que la presencia de tantos policías nuevos no obedecía a una rotación normal. Poco a poco, según los reportes del GEAN, agentes de seguridad pública de San Miguel empezaron a correr la voz de que en El Tamarindo, la DAN y el GEAN controlaban el puesto del policía. La reacción de los narcos no se hizo esperar. “Hubo un primer incidente en esa playa, un pick up grande, que era de los narcos, arrastró a una patrulla que los narcos sabían que era de la DAN, es decir, no era de los policías con quienes ellos trabajaban. Hasta hubo disparos ahí”, dice un

informe de la Operación Camaleón.

Pero también se filtró desde las jefaturas. “En los informes que recibíamos quedó claro que en Oriente había jefes de investigación, oficiales que se movían en vehículos de narcotraficantes, todo eso afectó”, dice el Agente 1. “Por Dios, si la información que se tenía era que los mismos agentes custodiaban los cargamentos; los narcotraficantes tenían comprados a los elementos policiales”.

Las dudas del GEAN -o al menos, de algunos oficiales- crecieron en torno al inspector Makey, un oficial aprobado por la DEA y escogido para recibir un curso avanzado de investigación con instructores estadounidenses en 2007 [7]. Los rumores sobre la implicación de este oficial crecían a medida que la operación avanzaba. En un informe, los policías del GEAN incluso consignaron que habían recibido pistas sobre la participación de Makey en la venta de cocaína en Santa Rosa de Lima y en la protección de vehículos cargados con droga. Con el tiempo, además, la Fiscalía abriría expediente por cargos de narcotráfico contra un subalterno de Makey llamado José Contreras Mejía, de alias “Tanque”.

La PNC capturó a Tanque el 7 de abril de 2008 tras decomisarle US\$23.000 que intentaba pasar por la frontera La Hachadura, en el departamento de Ahuachapán, al Occidente de El Salvador, para comprar tres kilos de cocaína en Guatemala [8]. Poco más de un año después, en mayo de 2009, la Fiscalía le ofreció un trato: su libertad a cambio de información. Tanque sigue siendo un hombre libre.

Makey, mencionado en una investigación periodística como uno de los responsables del fracaso de la Operación Camaleón, renunció luego de hacer pública una carta en la que alegaba ser objeto de persecución política y en los medios de comunicación. En un encuentro con los reporteros que habían realizado la investigación que lo implicaba con narcotraficantes, Makey lanzó una advertencia: “Tengan cuidado que no pase lo que en México, y es que en México los periodistas juegan a ser policías, y cuando los policías se meten con los narcos terminan muertos” [9].

El sinsabor de pocos resultados

El balance final de la operación no deja de provocar sinsabores entre los agentes que participaron o supieron de ella. Tanto el Agente 1 como el Agente 2, otro de los investigadores que participó en la Operación, reconocen que proveyó, como nunca antes, información sobre las rutas y los protagonistas del narcotráfico en Oriente. El juez Jorge González [10], del Juzgado Especializado de San Miguel, llevó sendos procesos judiciales contra Daniel Quezada y Juan Colorado, quien también formó parte de la estructura de Los Perrones, y reconoce que la investigación fiscal de la que arrancaron ambos casos está sustentada “a partir de las actas de investigación agregadas... de un plan Camaleón que desplegó la DAN”.

En una de las resoluciones que firmó contra Daniel Quezada, el juez González, además de concluir que hay suficiente prueba para seguir investigando, hizo una

solicitud a la Fiscalía, una de las primeras en la historia jurídica de El Salvador relacionada con la participación de policías en actividades de narcotráfico:

Se le expresa a la representación fiscal que, en base a la información que se establece como parte de los elementos agregados al proceso, se le encomienda realice las investigaciones respectivas sobre la vinculación con el imputado que se hace de la PNC de El Tamarindo, Conchagua, Playas Negras, El Jagüey, Los Ranchos y otros sectores aledaños.



Cuatro años después y a pesar de la petición judicial, el juez González confirma que solo la Inspectoría General abrió, en 2009 y bajo la breve dirección de la inspectora Zaira Navas, expedientes administrativos para investigar aquellas acusaciones. Pero ese archivo, al igual que otros también referidos al narcotráfico, fue cerrado por órdenes del general David Munguía Payés, segundo de los tres ministros de Seguridad en la administración del presidente Mauricio Funes.

Pero también es cierto que el plan no dio más de sí por “envidias institucionales” [11] y, de nuevo, por filtraciones desde la PNC, que además supusieron la muerte de un agente encubierto: Walter Nahún Ayala Castillo.

Al agente Nahún Ayala, quien ya se había hecho un nombre en la DAN gracias a varios arrestos de vendedores de droga antes de que en 2008 lo llamaran a trabajar como encubierto en la Operación Camaleón, lo balearon en El Tamarindo. Una muerte extraña, dice uno de sus colegas. “No le llamaría venganza, sino una forma de asustar al personal, de decirle: ¡hasta aquí! ¿Qué más mensaje se le puede mandar al personal [que investigaba a la gente de Daniel Quezada]?”.

Dice Agente 1 que en El Tamarindo hubo, durante el operativo, una sospecha muy fuerte de que mandos policiales de San Miguel se involucraron más en el negocio y empezaron a actuar como intermediarios de Daniel Quezada, por lo que el agente Nahún Ayala, quien manejaba informantes que lo habían llevado hasta quienes distribuían en Santa Rosa de Lima la cocaína que desembarcaba en la playa, se convirtió en un estorbo.

Un día, un informante lo puso sobre la pista de un kilo que saldría de Playas Negras. El encubierto notificó a su equipo de apoyo de que volvería a los territorios de Daniel Quezada a buscar la droga. Nadie llegó a socorrerlo. Ahí, en las veredas de polvo pegajoso que parten de la playa a los bosques salados aledaños, un grupo de sicarios lo esperaba, “pero el equipo no escuchó nada, y el equipo estaba ahí. Era algo premeditado”, dice Agente 1. La PNC ni siquiera abrió una investigación interna por el homicidio.

Romeo, un colaborador de Reynerio Flores Lazo, uno de los líderes de Los Perrones, dice que hasta sus oídos llegó que Daniel Quezada tenía un cementerio clandestino en El Tamarindo: “En Santa Rosa siempre dijeron que ahí está enterrado ese muchacho, el policía”.

Notas al pie

[1] Las fiestas patronales, realizadas en honor al patrono o patrona del santoral católico de las ciudades y pueblos, son organizadas y financiadas en gran parte por las alcaldías. En la tradición política salvadoreña estos eventos son muy importantes para recaudar fondos y buscar votos.

[2] Uno de los agentes que participó en la Operación Camaleón facilitó el acceso a una buena cantidad de los partes policiales e informes que el GEAN levantó en el terreno en 2008.

[3] Esta pista sirvió a la Fuerza Armada durante la guerra para operaciones de abastecimiento y para vigilar las rutas que en la primera década del siglo XXI usaban los narcos y en los ochenta, la guerrilla para abastecerse de armas. Ver entrevista con José Luis Tobar Prieto, jefe de la DAN, *El Diario de Hoy*, julio de 1997.

[4] Informe del GEAN Ref. 06-SASAGEAN7-06-114-UEDNA7-09, agregado al expediente judicial por tráfico de drogas abierto contra Daniel Quezada en el Juzgado Especializado de San Miguel.

[5] Testimonio del sargento Rudis Mauricio Santos Vásquez, anexo a expediente judicial abierto contra Daniel Quezada en el Juzgado Especializado de San Miguel.

[6] Aunque el comando estratégico y táctico del GEAN y de la Operación Camaleón funcionaba en San Salvador, los equipos especiales y los agentes encubiertos se apoyaban en la regional de la DAN de San Miguel, encargada normal de operaciones en la zona oriental.

[7] Cable 06SanSalvador851, enviado por la Embajada informando sobre personal de la PNC aprobado por la DEA y escogido para recibir cursos especializados.

[8] Ver “Narcotraficantes infiltraron a la PNC”, *El Faro*, 11 de mayo de 2009.

[9] Ver *ibidem*.

[10] Entrevista con el autor, agosto de 2012.

[11] Cita de Agente 1.

Cómo un narco llamado Colorado entra cocaína en Estados Unidos

Por Héctor Silva



La mujer llamó por teléfono a la oficina Bolívar de la Dirección Antinarco tráfico (DAN), el 13 de agosto de 2008, a eso de la 1:30 de la tarde. Lo que le contó al agente Javier Ramón Aguilar Ordóñez fue la historia de una red de narcotraficantes dirigida por Juan Colorado, determinaron

luego los investigadores.

El reporte que escribió el agente Aguilar Ordóñez sobre esa conversación no deja mucho lugar a la imaginación sobre Juan Colorado:

Se dedica al tráfico ilícito de drogas y forma parte de la estructura [criminal] de Los Perrones, (...). Se encargan de mandar grandes cantidades de droga cocaína hacia Estados Unidos de América, y para ello utilizan a personas que tienen visa para poder ingresar, y a encomenderos para que les lleven por medio de las encomiendas la droga; al regreso traen el dinero en pequeñas cantidades para no tener problemas en el aeropuerto[1].

Ruta San Salvador–Nueva York

Ese reporte cuenta la historia de un narco que compraba la droga a proveedores en Honduras: US\$3.000 el kilo de cocaína, para luego revenderlo por US\$6.500 a socios que, gracias a sus contactos entre los agentes de la DAN en el aeropuerto, podían garantizar que los paquetes viajarían sin problemas en aviones comerciales que hacían la ruta San Salvador-Nueva York.

En Queens, un contacto recibía a los viajeros y al principal operador de los viajes, quien luego entregaba la droga a dos distribuidores salvadoreños: uno de ellos, pandillero de la Barrio 18; y el otro, un colombiano de Freehold, Nueva Jersey. Alex, el pandillero, movía la droga hasta College Park, una ciudad en el estado de Maryland, a 20 minutos en carro del centro de Washington.

Un cálculo rápido de los números que constan en la investigación que la Fiscalía abrió permite hacerse una idea del volumen del negocio. La red, que movía un promedio de 20 kilos por viaje, hizo nueve envíos entre junio de 2007 y enero de 2008. Esto es, 180 kilos en siete meses, puestos directamente en los mercados de la

costa Este, es decir, con el precio triplicado según los cálculos de la Policía Nacional Civil (PNC). Juan Colorado vendía el kilo a US\$6.500, por lo que los 180 movilizados le supusieron un ingreso bruto de casi US\$1,2 millones.

Cada viaje le suponían US\$130.000 de ganancias netas. De ahí pagaba US\$5.000 a Rómulo Antonio Portillo, alias “Tony Sinaloa”, su operador principal; US\$10.000 a los que facilitaban el contacto con la PNC en el aeropuerto; y US\$1.000 más US\$200 de viáticos a cada uno de los dos o tres encomenderos que llevaban la droga en cada viaje. Por todo, unos US\$18.600 en gastos de operación por viaje.

Esta, sin embargo, era un operación en la que, además del dinero, lo espiritual era importante: dos testigos citados en las investigaciones policiales y en el escrito de la Fiscalía cuentan que siempre, sin excepción, antes de emprender un viaje al Norte, los hombres de Juan Colorado viajaban a Panchimalco, un municipio del departamento de San Salvador, a ver a una bruja que les daba suerte y les alejaba los males.

“Gilma Xiomara Vásquez tiene un centro negro... Hay una sala donde lo atendió una mujer como de 30 años de edad, piel trigueña, complexión normal, pelo largo, dice el testigo. Ella le pidió a él su fecha de nacimiento, luego le preguntó si alguien le había tratado de hacer daño y al final le dijo que ya estaba limpio para viajar, que se fuera con toda confianza, que no le iba a pasar nada”, dice el relato tomado a uno de los encomenderos de Juan Colorado, que luego sirvió como testigo en el proceso abierto por el Juzgado Especializado de San Miguel a la banda de narcotraficantes. Xiomara no era solo una consejera espiritual. Ella también elegía las casas en las que se guardaba la droga, decidía la fecha de los viajes e incluso guardaba dinero enterrado en su casa.

Recibido el visto bueno de la espiritista, Tony Sinaloa seguía una rutina: recogía la droga de manos de su patrón, a veces en casas de San Miguel, a veces en Placitas o en San Jorge, en las faldas del volcán Chaparrastique. Con el carro cargado —la droga en las maletas— Tony Sinaloa emprendía camino por la carretera Litoral a encontrarse en una gasolinera con los contactos más importantes del periplo, los hermanos Carlos, Nelson y Tito Castro[2], de Puerto El Triunfo, Usulután, departamento al Oriente del país.

Tony Sinaloa había conocido a los Castro en 2005, cuando le ofrecieron paso libre por el aeropuerto. “Cuando querrás pasar algo por el aeropuerto, te puedo ayudar; tengo un amigo que trabaja en la DAN y está destacado ahí, a quien podemos contactar y facilitar los envíos”, dice en la acusación contra la red de Juan Colorado.

En 2007, tras dar a Juan Colorado el contacto que abriría las puertas del aeropuerto, Tony Sinaloa se convirtió en su lugarteniente, y fue quien estableció el modus operandi de la banda.



La droga iba de San Miguel al aeropuerto, los Castro avisaban a su contacto en la DAN -el agente Leonel Alexander Granillo Santos- y la droga se embarcaba sin problemas. En los aeropuertos de Newark y el JFK de Queens, en Nueva York, no hubo problemas durante meses. En una ocasión incluso pararon a dos viajeros en la terminal aérea de

Nueva Jersey: “Nos pasaron por los rayos X, pero no nos detectaron nada”, contó un testigo en el proceso judicial.

Álex, el pandillero de la Barrio 18, movía los cargamentos hasta un taller de College Park, en Maryland, a 398 kilómetros del aeropuerto de Nueva Jersey, desde donde entraba al mercado del área metropolitana de Washington.

Los testimonios recogidos en la acusación de la Fiscalía contra Juan Colorado indican que Álex hacía sus propios subcontratos con transportistas para mover la droga, y fueron precisamente tratos mal amarrados entre los subcontratistas de los subcontratistas los que empezaron a golpear el negocio. A principios de 2008, por ejemplo, Juan Colorado suspendió los envíos por un tiempo luego de que Álex perdiera 24 kilos entre Nueva Jersey y Maryland.

Capturas y liberaciones

El 5 de diciembre de 2009, tras recibir información de algunos miembros de la red y de agentes antinarcoóticos estadounidenses, y después de una investigación que llevaba al menos medio año, la PNC capturó a Juan Colorado en uno de sus lugares preferidos, una faraónica pista de carreras enclavada entre San Miguel y Santa Rosa de Lima: una construcción para carreras de cuarto de milla, con graderíos y una torre de control, en la que el capo desplegaba su colección de autos en festivales domingueros a los que llegaba la gente fuerte de la zona. Los agentes encontraron ahí dos armas, una Magnum Smith & Wesson con 7 cartuchos y una 9 mm con pavón blanco; también una bolsa de cocaína.

La captura de Juan Colorado fue el último episodio de una operación policial, empujada desde la Fiscalía y las agregaduras de agencias estadounidenses, para capturar a los principales líderes de Los Perrones. Esa fue, desde los principales despachos de la PNC, la versión oficial. Juan Colorado terminó condenado a 15 años de cárcel por mover entre 180 y 200 kilos de cocaína con una red de encomenderos-hormiga. A



diferencia de otros transportistas de la banda, como Reynerio Flores Lazo o Daniel Quezada, la mercancía de Colorado llegaba hasta las calles de Maryland y Nueva Jersey.

Aún hay, sin embargo, elementos que no encajan: Daniel Quezada fue liberado por un juez que, en marzo de 2011, resolvió que no había suficientes pruebas para condenarlo. La Operación Camaleón, montada en 2007 por unidades antidrogas del Grupo Especial Antinarcoóticos (GEAN) para acabar con Los Perrones a partir de las investigaciones contra Daniel Quezada, y gracias a la cual se descubrió el involucramiento de al menos cuatro puestos de la PNC en el trasiego desde Nicaragua, recibió ese día su tiro de gracia. Ningún jefe policial o mando medio ha enfrentado proceso criminal, mucho menos cárcel, por la muerte del agente Walter Nahún Ayala Castillo o por la infiltración en los puestos de playa.

También reveló vínculos con la Fuerza Naval, pero ningún militar fue procesado. Tony Sinaloa, el lugarteniente de Juan Colorado y su enlace con Daniel Quezada, estaba procesado por narcotráfico, pero decidió colaborar con la Fiscalía en 2009 y 2010 con información sobre la banda. Se le acusaba de haber organizado la red de colaboradores que la banda tenía en las dependencias de la DAN en el aeropuerto. Sin embargo, incluso con Juan Colorado preso en El Salvador y Tony Sinaloa detenido en Estados Unidos, la red de la DAN en el aeropuerto siguió funcionando: en enero de 2013, la PNC capturó a otros nueve agentes que dejaban pasar droga, pero ningún oficial de rango alto o medio ha sido acusado, procesado, mucho menos encarcelado por esto.

De todos los líderes, el que se llevó la peor parte fue Reynerio: la Fiscalía lo acusó de mover 2.400 kilos de cocaína, y un juez lo condenó a 80 años.

Para 2010, Los Perrones se habían recompuesto, según informes del Centro de Inteligencia Policial (CIP), y del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Otros líderes que nunca fueron procesados o investigados, como Élmer Bonifacio Medrano Escobar, se reagruparon y empezaron a expandirse hacia Honduras y a comprar más terrenos en el litoral, alejados de sus zonas tradicionales de influencia[3].

En 2012, tanto el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada[4] como el director general de la PNC[5], reconocieron que los narcotraficantes de la zona oriental se estaban reagrupando y que sus capacidades de transporte eran mayores. Un año antes, y a pesar de los arrestos de líderes narcos en El Salvador, por el país pasó una cantidad récord de hasta 11.000 kilos de cocaína, según un informe del Departamento de Estado[6].

Desde Honduras, Romeo, un colaborador de Reynerio tiene su versión: “Todo sigue igual, a Reynerio y al Chele Colorado [Juan Colorado] los agarraron porque se creyeron narcos mexicanos y empezaron a lucir el dinero”. La siguiente frase revela otra razón, la más grave: “Y a Reynerio le pasaron una factura política porque dejó de pagar a los políticos”.

Concluye Romeo:

En 2006 ya nos dijeron que la presión para perseguir al crimen organizado era fuerte. Nosotros pagábamos informantes en las aduanas, y ellos nos dijeron que se venía algo fuerte. Reynerio metió más droga y más plata, un vergo de plata, hasta empezó a mover droga en Ilopango. El problema es que el Gobierno tenía que mostrar algo, y estos empezaron a lucir sus carros, a andar fanfarroneando en las ferias allá en los pueblos de Oriente, con sus caballos y toda esa mierda. Los ubicaron bien. Los perfilaron y decidieron: estos cabrones son.

Notas al pie

[1] Testimonio recogido en el escrito de acusación presentado por la Unidad Especializada en Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía ante el juez especializado de Instrucción de San Miguel. San Miguel, 8 de diciembre de 2009.

[2] “Cinco capturas más por colaborar con Juan Colorado”, *La Prensa Gráfica*, 18 de marzo de 2010.

[3] Ver, del autor, “Perrones. El renacimiento de la banda de narcos salvadoreños”. Disponible en <http://hectorsilvalalos.blogspot.com/2012/04/perrones-el-renacimiento-de-la-banda-de.html>.

[4] Ver “Los Perrones recibieron drogas por submarinos”, *La Prensa Gráfica*, 19 de abril de 2012.

[5] Ver “Los Perrones estarían por reagruparse: PNC”, *La Prensa Gráfica*, 12 de abril de 2012.

[6] “Rutas y volúmenes del tráfico de cocaína en Centroamérica. Informe de trabajo”, Departamento de Estado.

El arreglista y la oportunidad perdida de la policía de El Salvador

Por Héctor Silva



En la foto, ambos sonríen. En primer plano, en la mitad izquierda, el hombre con camisa clara de mangas cortas y botones, jeans y un reloj metálico, sostiene una botella de agua en la mano derecha. Ríe con ganas. Es Herbert Saca. En la mitad derecha, un hombre con sombrero, camisa blanca también y un pañuelo azul en el cuello. Es Juan Umaña Samayoa,

candidato a reelegirse como alcalde de Metapán, ubicado en el departamento de Santa Ana, al occidente de El Salvador, por el Partido de Conciliación Nacional. En el fondo, una carpa roja y siluetas de un grupo que parece nutrido.

Juan Umaña es uno de los políticos vinculados al Cartel de Taxis, una estructura aún más grande y más influyente que Los Perrones, el poderoso consorcio de contrabandistas de lácteos e indocumentados, según los informes de inteligencia citados por El Faro en varios artículos en los que revela la estructura de esta organización.

La foto en la que Umaña y Saca comparten sonrisas fue tomada a pocas semanas de que el primero fuera reelegido alcalde de Metapán, en la zona de influencia del cartel. Investigaciones periodísticas de El Faro revelan que dos síndicos de la alcaldía de Metapán han sido asesinados, un regidor capturado con cinco kilos de cocaína y que incluso el propio alcalde sufrió un atentado. “Los cinco casos”, dice el periódico digital, “tienen un denominador común: involucran la palabra narcotráfico”[1].

Cuando Herbert Saca se tomó la foto a finales de 2011, su posición ante el presidente Mauricio Funes Cartagena era ya la de un privilegiado. Lo confirman otra investigación periodística[2] y varios testimonios[3], así como informes de inteligencia elaborados por el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) desde 2009.

“Herbert empezó a entrar a Casa Presidencial porque el grupo íntimo del presidente le comió la cabeza con que el FMLN [Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional] lo vigilaba y quería joderlo. La gente de los Amigos de Mauricio [Funes] pensó que podían usarlo como operador político, pero se equivocaron: Herbert los usó a ellos para entrar”.

Quien habla es un exfuncionario del presidente Funes, miembro del FMLN, que

salió del Gobierno en 2011 tras el cambio de autoridades en el área de seguridad.

El arreglista

Es imposible contar la historia del bajo mundo en El Salvador sin mencionar a la policía y Herbert Ernesto Saca Vides. Saca es, aseguran quienes lo conocen, un hombre afable. Sus amigos —variados y poderosos— dicen de él que resume ese estilo campechano que suele cosechar éxitos en la política salvadoreña. Sus enemigos —entre los que también se cuenta gente con importantes cuotas de poder, sobre todo en la derecha representada en Alianza Republicana Nacionalista (Arena)— dicen de él que es uno de los más oscuros operadores políticos de las últimas dos décadas.

“Es un hombre muy astuto, con una gran capacidad de relaciones, pero también con un gran don para la oscuridad”, lo describe otro exfuncionario de la administración del presidente Funes, independiente del FMLN, que lo conoce desde el quinquenio anterior. “Es, sin duda, un operador efectivo. Claro, no para una operación política sana”.

Por su relación con lo más granado del poder político, por su capacidad de hacer trascender su influencia de la última administración de Arena a la primera del FMLN, por los vínculos que forjó con el crimen organizado desde inicios de la década, por estar en el radar de Estados Unidos al menos desde 2008, por saber aprovechar y ensanchar las estructuras de corrupción que encontró en la PNC, Herbert Saca puede ser considerado el operador mejor instalado en el poder político, responsable de que dinero del crimen organizado financiara campañas electorales, según testimonios recabados entre operadores del narcotráfico y exfuncionarios de alto nivel de tres Gobiernos diferentes[4]. Su historia de vida refleja, mejor que la de ningún otro operador político, la historia de la infiltración en El Salvador.

Para tener una idea de su alcance, analistas del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) recopilaron 1.797 llamadas, hechas y recibidas, entre el 15 de febrero y el 15 de junio de ese año, de los números 7833-7110 y 7180-4034, ambos registrados a nombre de Herbert Saca. En estos informes se registraron las bitácoras de llamadas, algo que, según investigadores de inteligencia, el OIE está facultado para hacer, aunque no lo está para intervenir conversaciones telefónicas. Entre otros, llamó al inspector de la PNC, Walter Reymundo Lazo Merino, exjefe de la División Élite contra el Crimen Organizado y para entonces destacado en la Interpol de El Salvador; a la esposa de Marcos Gregorio Sánchez Trejo, presidente de la Corte de Cuentas; a la centralita de la Asamblea Legislativa; a la alcaldía de Santa Cruz Analquito, Cuscatlán; a la Corte Suprema de Justicia; a cuatro celulares asignados al Tribunal Supremo Electoral; a Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños; y a una empresa representada por Irving Pável Tóchez y Nicolás Antonio Salume Babún.

En el reporte también aparecen cuatro llamadas al 7190-9100, el número de celular de la cuenta corporativa de Casa Presidencial asignado al presidente Funes.

Además de manejar campañas y tratos políticos, Herbert Saca ha tenido, siendo asesor de su primo el Presidente Elías Antonio Saca González y luego de Funes, relaciones con varias personas investigadas en diferentes momentos por el Estado por casos de narcotráfico y crimen organizado y aparece ligado a Los Perrones y al Cartel de Taxis.

Herbert Saca también compartía un abogado con Reynerio Flores Lazo, uno de los principales líderes de los Perrones. Fue sujeto de investigación por vender carros al otro líder de los Perrones, José Natividad “Chepe” Luna Pereira. Cuando su primo Antonio Saca llegó al poder, Herbert Saca empezó a cobrar a varios narcos por “protección” pero Reynerio se negó.

“Él tuvo margen para arreglar, pero ya no quiso”, dijo una fuente sobre la decisión de Reynerio de no pagar a Saca.

La decisión fue fatal. En 2008, luego de los intentos fallidos debido a filtraciones originadas en los más altos mandos de la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), el Gobierno emprendió una intensa persecución contra Los Perrones que culminó, en principio, con acusaciones contra Reynerio, su esposa, su hermano Héctor Armando y la esposa de este. Los Flores Lazo alegaron que se trataba de una vendetta política dirigida por Herbert Saca. Reynerio luego fue condenado a 60 años.

En Washington, el interés por Herbert Saca —y por toda la administración del presidente Saca— empezó allá por 2008. “Vino un grupo de Estados Unidos, que inicialmente no se identificó como una investigación oficial, pero luego me quedó claro que lo era, y empezaron a hacer preguntas sobre la corrupción”, dice un miembro de Arena, funcionario del presidente Saca. Otro exfuncionario de esa administración confirma que lo llamaron desde Washington en 2010 para interesarse por el primo del expresidente.

A mediados de 2013, dos oficiales de la administración del presidente Barack Obama que, desde dos agencias diferentes analizan la aplicación de la ley y la política en El Salvador, confirmaron que Herbert Saca es una persona que en Estados Unidos tiene expedientes abiertos. Eso, explicitaron ambos, no significa que Washington esté pensando en ejercer acciones contra él, pero tampoco significa que no.

El surgimiento de Herbert Saca coincide con el de los exmilitares del Acuerdo 221, que daba de baja en forma extemporánea a 25 oficiales del ejército, miembros de los antiguos cuerpos de seguridad, momento en el que el cáncer de la corrupción se esparció por la PNC. El crimen organizado, sobre todo el de Oriente, cosechaba así los primeros frutos de sus inversiones en agentes y oficiales que habían desfilado por la Dirección Antinarcotráfico (DAN), Finanzas, la Regional Oriental o la División de Fronteras. La influencia dejó de limitarse a las relaciones construidas

con sobornos en prostíbulos o delegaciones locales. Los amigos estaban ahora en los despachos más importantes del castillo, como se conoce el cuartel central de la PNC en San Salvador. Pero no fue hasta el período del presidente Saca y de la llegada de su Herbert a los círculos de poder, siempre con el entonces director de la PNC, Ricardo Menesses, al frente, cuando la infiltración se institucionalizó. Para 2004, a la penetración del crimen organizado en el Estado a través de la PNC se había sumado la entrada de las mafias al juego político a través de tres mecanismos: uno, el financiamiento de campañas políticas, primero a escala local y después a escala nacional, como sucedió en las presidenciales de 2009; dos, el pago de sobornos a los operadores políticos para garantizar el libre funcionamiento de las redes criminales, el paso y protección de mercancías; y tres, el oportuno aviso, desde la PNC, de operativos orientados a la captura de integrantes de las bandas. De allí en adelante ha sido el tumor de por vida.

Oportunidad perdida

“El problema de la PNC es que los comisionados pasan más tiempo viendo cómo se joden unos a otros que realmente haciendo algo... A estas alturas puede ser que la única solución sea desechar a las primeras promociones y buscar nuevos liderazgos”. Lo dice un agente federal de Estados Unidos en una cafetería de San Salvador[5]. Sus palabras no dejan de sorprender, porque Washington ha sido uno de los principales aliados de la PNC. Uno de sus principales financistas. Su principal valedor.

Pero 2012 y 2013 no fueron buenos años para la relación entre Washington y la PNC. La tregua entre las pandillas MS13 y Barrio 18 marcó un distanciamiento de las autoridades de Seguridad Pública con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).



En 2013, el senador estadounidense Patrick Leahy señaló al actual presidente salvadoreño, Mauricio Funes, con duras palabras sobre la corrupción en la Policía, la falta de transparencia y la inacción del Gobierno en contra del lavado de dinero y el crimen organizado. Inconforme con giros que Funes dio en el área de Seguridad, que implicaron el empoderamiento en la PNC

de oficiales acusados de corrupción, Leahy estuvo a punto de congelar un millonario programa de cooperación conocido como Fomilenio II. Al final, el senador no detuvo el financiamiento, pero dejó claro que el desembolso final depende, en parte, de que haya limpieza en la Policía.

A la base de los reclamos de Leahy están los cuestionamientos varias veces

repetidos sobre el fracaso del Estado en la persecución del delito y el crimen organizado, sobre la corrupción en la PNC, sobre la falta de institucionalidad y sobre la presencia en oficinas públicas de funcionarios cuestionados.

“Aunque El Salvador puede señalar algún progreso... sigue siendo un país con instituciones democráticas débiles, en el que la independencia judicial ha sido atacada, la corrupción se ha extendido y las organizaciones criminales transnacionales y el lavado de dinero han florecido”, dijo el senador de Vermont en el pleno del Senado el 18 de septiembre de 2013. Y continuó: “En los últimos años he visto cómo los salvadoreños son víctimas de la violencia, de una Policía corrupta, de individuos en posiciones de seguridad que se preocuparon más por enriquecerse que en mejorar las condiciones de su gente”[6].

Las palabras del senador Patrick Leahy sobre la PNC se parecen mucho a las que 20 años atrás pronunciaban los oficiales de Naciones Unidas que supervisaron su despliegue territorial tras la firma de los Acuerdos de Paz al hablar, frustrados, de la falta de controles y transparencia en el nuevo instituto policial.

A las puertas de un nuevo Gobierno en El Salvador, que tomará posesión en junio de este año, tras la segunda ronda electoral que se celebrará el 9 de marzo, las voces discretas de funcionarios estadounidenses y salvadoreños empiezan a sonar alarmadas: “A estas alturas, puede ser que la única solución sea desechar a las primeras promociones y buscar nuevos liderazgos”, decía un agente federal de Estados Unidos a mediados de 2013.

Esas primeras promociones, las que copan la PNC desde los días del pecado original —que permitió el traspaso sin filtros de oficiales, de valores y de una cultura de impunidad— han mantenido el poder durante 20 años. Esas primeras promociones han mandado durante dos décadas marcadas, en general, por fracasos en la investigación, la ausencia de controles internos y la consolidación del crimen organizado.

Hubo, sí, períodos excepcionales marcados por la valentía de oficiales y agentes que aprovecharon los pocos resquicios que existieron para intentar quebrar la inacción, la complicidad o la desidia institucional. Fue durante esos paréntesis que hubo algunos intentos de depuración, silenciosa o frontal. Fue entonces cuando algunos oficiales, aun en los años del presidente Armando Calderón Sol (1994-1999), se atrevieron a denunciar la participación de las élites políticas en el crimen organizado. Pero todos esos gestos de ética e integridad fueron, sin embargo, hechos aislados y excepcionales, no una tendencia sostenida capaz de contrarrestar la infiltración del crimen organizado que aún hoy carcome a la PNC.

Notas al pie

[1] Lemus y Arauz, “Otro concejal de Metapán vinculado por la autoridades al tráfico de drogas”, *El Faro*, 27 de enero de 2012.

[2] Sergio Arauz, “Los nuevos amigos del presidente”, *El Faro*, 4 de octubre de 2011.

[3] Entre septiembre de 2012 y agosto de 2013, el entrevistador habló con dos exfuncionarios del presidente Saca y media docena de políticos de la administración del presidente Funes para ahondar en la relación con Herbert Saca. Todos ellos y dos oficiales estadounidenses, *off the record*, confirmaron la cercanía.

[4] Para elaborar el perfil de Herbert Saca, se recurrió a entrevistas con funcionarios de las administraciones de los presidentes Flores, Saca y Funes. También se habló con miembros y exmiembros de Los Perrones que trabaron tratos con él y que han compartido esa información con agentes estadounidenses. Y se corroboró información con dos docenas de agentes de la ley en El Salvador, Guatemala, Honduras y Estados Unidos.

[5] Con este funcionario, miembro de una agencia de aplicación de la ley, el autor platicó en una cafetería en San Salvador. También conversó sobre la PNC con otro funcionario estadounidense, diplomático, en una cafetería en Washington. No tuvieron problemas en hacer su evaluación sobre la PNC, una con las que su país más ha colaborado en Centroamérica, pero lo hicieron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a discutir públicamente posiciones de su país respecto a política interna salvadoreña.

[6] Récord Congressional. “Senator Leahy’s Statement on El Salvador’s MCC”. Washington DC, 18 de septiembre de 2013.